

## **VI. Normas reguladoras del sector de las telecomunicaciones aprobadas y publicadas en el año 1999**

## VI. Normas reguladoras del sector de las Telecomunicaciones aprobadas y publicadas en 1999

Se ha tratado de reunir aquí las disposiciones más relevantes para el sector de las telecomunicaciones publicadas en el año 1999 tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

Para ello, se han agrupado las distintas normas en dos bloques diferentes: por un lado, se encuentra la normativa española vigente y, por otro, la normativa comunitaria. Asimismo, se realizan unos breves comentarios a las normas de mayor trascendencia e interés en el mercado de las telecomunicaciones.

### 1. PUBLICACIONES DE 1999 EN BOE

#### 1.1. Legislación española

##### A) Normativa relativa a telecomunicaciones

- **REAL DECRETO-LEY 6/1999, de 16 de abril**, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.

(BOE núm. 92, de 17 abril 99. Corrección de errores, BOE núm. 101, de 28 abril 99)

Esta norma con rango de ley se encuadra dentro de las medidas adoptadas durante 1999 para atajar la tendencia inflacionista detectada en la economía nacional. Partiendo del objetivo de lograr un ritmo de crecimiento económico que permita continuar aproximando los niveles de renta per cápita de España a los del resto de países de la Unión Europea, la política económica de nuestro país se ha orientado hacia una mayor liberalización y flexibilización de los sectores productivos, entre los que se encuentran las telecomunicaciones, valiéndose de medidas que estimulen la competencia en los mercados de bienes y servicios, contribuyendo a una mejor estabilidad de la economía mediante una mejor asignación de los recursos y una mayor igualdad de oportunidades de los agentes en dichos mercados.

No obstante, en España se han puesto de manifiesto importantes aumentos en los precios de algunos sectores, especialmente en los menos expuestos a la competencia exterior, que obligan a la adopción de medidas urgentes para evitar la aparición de tendencias inflacionistas. Por lo tanto, se considera adecuada la adopción de medidas liberalizadoras, pero aplicadas antes de que se originen posibles brotes inflacionistas que amenacen el proceso expansivo de nuestra economía.

Las medidas adoptadas en la presente norma tienen por objeto provocar una reacción positi-



va tanto sobre los precios como sobre las condiciones de la competencia en nuestra economía.

En concreto, y a los efectos que aquí nos interesa, en el capítulo V de la presente norma se establecen reducciones de precios en los servicios de telecomunicaciones y, por otro lado, el compromiso de adoptar medidas que fomenten un incremento de la competencia efectiva en el mercado de la telefonía móvil.

- **LEY 22/1999, de 7 de junio**, de Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

(BOE núm. 136, de 8 de junio 99)

La presente norma se encarga de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 97/36/CE, de 30 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre, del Consejo sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

No obstante, los cambios producidos en la regulación del sector, la propia evolución de la realidad audiovisual en España, la existencia de nuevas prácticas tecnológicas y comerciales y la constatación de que algunos preceptos de la Ley 25/1994 resultaban imprecisos o se apartaban de los criterios fijados por la Unión Europea, han determinado la conveniencia de aprovechar la aprobación de esta disposición para introducir, además, adaptaciones en la vigente normativa.

En el articulado se sustituye toda alusión a las entidades que prestan servicio público de televisión por una más general como es los operadores de televisión, evitando toda referencia al carácter de servicio público, ya que existen en

España servicios de televisión que no tienen la consideración de servicio público, pero a los que la Directiva no excusa del cumplimiento de las obligaciones impuestas en ella, por lo que no podría ser excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. Por el contrario, se excluye de su ámbito de aplicación a las televisiones locales.

Por su parte, se habilita a las Comunidades Autónomas para que adopten medidas activas de protección de su lengua propia.

Respecto al criterio para determinar la jurisdicción estatal competente, se ha considerado aplicable establecer el del lugar de establecimiento del operador (criterio económico).

Asimismo, se ha trasladado a la Ley española el reconocimiento de la libertad de retransmisión, incluido en la Directiva 89/552/CEE, pero que no recogía la Ley 25/1994, para excluir cualquier tipo de intervención administrativa previa que tenga por objeto controlar la adecuación de las emisiones transfronterizas a la normativa comunitaria o a la legislación del correspondiente Estado miembro. Sin embargo, esta nueva redacción deja abierta la posibilidad de una intervención de la Administración en caso de violación reiterada y sistemática de las normas concernientes a la protección del menor.

Por otro lado, se establece el principio de reciprocidad para el reconocimiento del carácter europeo de las obras audiovisuales, y se elimina el calendario orientativo de explotación de obras cinematográficas recogido en el artículo 8 de la Ley 25/1994.

Asimismo, se da un impulso a la promoción de la industria audiovisual española y europea, al establecer la obligación de que los operadores de televisión destinen un 5 por 100 de sus ingresos a la financiación de largometrajes cinematográficos europeos y de películas para televisión de igual procedencia.

En cuanto al régimen de la publicidad, se da un tratamiento específico a la televenta como fenómeno distinto de la publicidad y, en general, se

tiende a flexibilizar y a aligerar las obligaciones impuestas a los operadores de televisión en la Directiva 89/552/CEE. Además, se permite y regula el funcionamiento de cadenas de televisión dedicadas exclusivamente a la televenta o a la autopromoción y se amplía el tiempo máximo que puede destinarse a la televenta, cuando ésta se lleve a cabo dentro de programas que cumplan determinados requisitos.

Sobre el régimen sancionador se incorpora expresamente el procedimiento para que terceros interesados, incluidos los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, puedan reclamar en caso de posible incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.

Con la presente traslación de la Directiva 97/36/CEE al Derecho interno, el Estado español queda obligado a incorporar el principio del reconocimiento mutuo en la regulación del ejercicio de los derechos exclusivos sobre acontecimientos de interés general para el público de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Finalmente, se aprovecha la ocasión para rectificar ciertas imprecisiones en la actual redacción del texto de la Ley vigente que podían dar lugar a conflictos de interpretación y para limitar la consolidación de ciertas prácticas, como la contraprogramación, reconociendo los derechos de los usuarios, en cuanto telespectadores, a recibir una información adecuada y verídica sobre la programación prevista. De entre estas modificaciones se destacan: la inclusión de nuevas formas de publicidad como la virtual o la regulación de las telepromociones y los telerreportajes, así como las reglas sobre las interrupciones comerciales y la actualización de las sanciones pecuniarias.

En definitiva, y como se indica en la exposición de motivos de la presente Ley, con la publicación de ésta se ha querido conjugar un triple interés:

- Incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 97/36/CEE.
- Regular, con mayor claridad, la actividad televisiva.

- Garantizar los derechos de los usuarios frente a determinadas formas de publicidad abusivas o perniciosas para sus legítimos intereses.

#### • REAL DECRETO-LEY 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.

(BOE núm. 224, de 18 septiembre 99)

Como consecuencia del desarrollo tecnológico de los últimos años, y de su implantación en la sociedad, se consideraba necesario introducir en nuestro ordenamiento jurídico la normativa general que permita la utilización, con la adecuada seguridad jurídica, de la firma electrónica y considerarla como medio tecnológico que contribuya, a su vez, al desarrollo de la que se ha venido en denominar la sociedad de la información. La urgencia de la aprobación de esta norma deriva, también, del deseo de dar, a los usuarios de los nuevos servicios, elementos de confianza en los sistemas, permitiendo su introducción y rápida difusión.

El objetivo principal del Decreto Ley comentado es la de recoger los elementos suficientes para proteger la seguridad y la integridad de las comunicaciones telemáticas en las que se emplee la firma electrónica. Por su parte, existen ya en España normas en este sentido como son, la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta por medios telemáticos o como el sistema de cifrado y firma electrónica aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se emplea para la recepción de información de las entidades supervisadas, y la posibilidad que tiene la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real de la Casa de la Moneda de prestar los servicios técnicos y administrativos necesarios para garantizar la seguridad, la validez y la eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

En definitiva, este Real Decreto-Ley persigue establecer una regulación clara del uso de la firma electrónica, atribuyéndole eficacia jurídica y previendo el régimen aplicable a los prestadores de servicios de certificación (principios

generales, el régimen de los certificados y las condiciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación). Las normas sobre esta actividad son de aplicación a los prestadores de servicios establecidos en España.

Entre los requisitos exigibles a los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos, y como novedad importante en la norma que ahora comentamos, se contempla la posibilidad de permitir que en la certificación pueda recogerse la fecha y la hora en la que se produce la actuación certificante.

Por otro lado, esta norma determina el registro en el que habrán de inscribirse los prestadores de servicios de certificación y el régimen de inspección administrativa y control de su actividad. Asimismo, se regula la expedición y la pérdida de eficacia de los certificados.

Finalmente, se regulan las normas sobre los dispositivos de firma electrónica y la evaluación de su conformidad con la normativa aplicable, así como el régimen aplicable a la tasa por el reconocimiento de acreditaciones y certificaciones. En el Título V, y último, se tipifican las infracciones y las sanciones que se prevén para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma.

- **REAL DECRETO-LEY 16/1999, de 15 de octubre**, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones.

(BOE núm. 248, de 16 octubre 99)

En la misma línea del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, ya comentado, y con las miras puestas en una reducción general de la inflación, a través de una adecuada política tarifaria, se precisa facilitar el progresivo abaratamiento en los precios de las llamadas telefónicas, incidiendo en una serie de aspectos como es el precio previsto para el alquiler de circuitos. Se adoptan medidas tarifarias específicas que hacen cada vez más asequibles los precios de acceso a Internet. Asimismo, se pretende facilitar que el conjunto

de los usuarios españoles de telefonía fija pueda conectar con terminales de telefonía móvil, a precio cada vez más reducido.

Para el adecuado desarrollo del sector de las telecomunicaciones en un ámbito liberalizado, se reputa conveniente, igualmente, establecer un calendario para que la preasignación de operador se instaure en España, haciendo compatibles las posibilidades técnicas y los intereses de los usuarios, así como permitir, en el sector de la telefonía móvil automática, que el conjunto de sus usuarios pueda conservar su número, en caso de cambio de operador. Por último, con este Real Decreto Ley se pretende garantizar la continuidad en la prestación del servicio portador de televisión, reconociendo que los servicios portadores de los de difusión se prestarán en régimen de libre concurrencia, una vez finalizado el plazo de diez años establecido en la Disposición transitoria séptima de la LGTel.

Para responder a estos objetivos, el Real Decreto-Ley 16/1999, de 15 de octubre, fija una reducción de precios de determinados servicios de telecomunicación prestados por el operador dominante, un calendario para implantar los mecanismos de preasignación en su red y una fecha (1 de julio de 2000) para que todos los operadores que presten servicio de telefonía móvil automática implementen los procedimientos que permitan a sus abonados la conservación del número. A su vez, establece medidas específicas para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios portadores de los de difusión, a través de la consideración de obligaciones de servicio público, y recoge medidas específicas respecto del servicio de Internet que afectan a la tecnología ADSL y a los planes de descuento para llamadas metropolitanas.

- **LEY 52/1999, de 28 de diciembre**, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

(BOE núm. 312, de 29 diciembre 99)

En relación con el comentario de esta reforma, es necesario recordar que, partiendo del papel pre-

ponderante atribuido al buen funcionamiento de los mercados para asegurar un crecimiento estable y no inflacionario de la economía y, consecuentemente, de la creación de empleo, la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, nació con el objetivo de dotar a los poderes públicos de un instrumento eficaz para garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público, inspirándose en las normas comunitarias de política de competencia.

En ese sentido, la profundización en el proceso de liberalización de los mercados que afronta la economía española hace necesario potenciar una política de defensa de la competencia que garantice la efectividad del esfuerzo liberalizador, evitando que el comportamiento de los operadores económicos desvirtúe el adecuado funcionamiento de los mercados y prive a los consumidores de sus ventajas. A este fin responde la Ley comentada, que viene a culminar el proceso de reforma iniciado con el comentado Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, en materia de control de concentraciones.

En lo que respecta al mercado de las telecomunicaciones, las novedades más significativas inciden en la delimitación más precisa de las funciones de los órganos de defensa de la competencia previstos en esta Ley respecto de las encomendadas a otros órganos e instituciones administrativas, de competencia sectorial, entre los que se encuentra la CMT. En este sentido, la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, introduce modificaciones no sólo en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, sino también en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.

• **LEY 55/1999, de 29 de diciembre**, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

(BOE núm. 312, de 30 diciembre 99)

Como en años anteriores, la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado esta-

blece un conjunto de objetivos de política económica cuya consecución exige la aprobación simultánea de diversas medidas normativas que permitan la ejecución del programa económico del Gobierno.

En este sentido, y en lo que se refiere a las previsiones de esta Ley relativas a diversos aspectos de la acción administrativa sectorial, el Capítulo VI del Título V establece medidas sobre el sector de las comunicaciones. Así, se reforma la Disposición derogatoria de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a fin de extender la libre competencia a los servicios de valor añadido de telecomunicaciones prestados a través de servicios difusores y se introduce una modificación puntual en el artículo 21 de la Ley 10/1988, de Televisión Privada, para aclarar que el Ministerio de Fomento ha de pronunciarse expresamente para aceptar o rechazar las adquisiciones de participaciones significativas en el capital de las sociedades concesionarias, en el plazo de tres meses desde la entrada de la preceptiva comunicación en el citado Departamento.

Por último, las Disposiciones adicionales trigésima a trigésima segunda introducen modificaciones en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, con respecto a los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y televisión digital terrenal, así como en referencia a los convenios de colaboración que puedan suscribir las Comunidades Autónomas con espacios radioeléctricos colindantes.

• **REAL DECRETO 279/1999, de 22 de febrero**, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

(BOE núm. 58, de 9 marzo 99)



Con la publicación del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, se fija un nuevo marco jurídico en esta materia, estableciéndose, desde la perspectiva de la libre competencia, la posibilidad de dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable, así como para posibilitar la planificación de dichas infraestructuras de forma que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura.

La Disposición final primera de dicho Real Decreto-Ley autorizó al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo. En su virtud, la presente Disposición constituye, por una parte, el desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley 1/1998.

Por otra parte, el Real Decreto comentado viene a cumplir con el mandato establecido en el artículo 53 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones que difiere al posterior desarrollo reglamentario la determinación del punto de interconexión de la red interior con las redes públicas y las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo, establece la normativa técnica básica de edificación que debe regular la infraestructura de obra civil, en la que se ha tomado en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes de telecomunicación y la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores de forma que se facilite el uso compartido de las citadas infraestructuras.

Finalmente, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la LGTel, que prevé que reglamentariamente se establecerán las condiciones aplicables a los operadores e instaladores de equipos y aparatos de telecomunicaciones a fin de que, por medio de la acreditación de su competencia profesional, se garantice la puesta en servicio de los equipos y aparatos de telecomunicaciones que se instalen.

A estos efectos, el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado como anejo a este Real Decreto para la efectiva aplicación de las previsiones establecidas en las citadas normas legales, además de establecer reglas de carácter general con respecto a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de los edificios y con respecto a las condiciones que deben cumplir los instaladores de telecomunicaciones, establece, en los Anexos I al IV, las normas y especificaciones técnicas que debe cumplir las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de los edificios para permitir el acceso a todos los servicios de telecomunicaciones; las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para que se garantice la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos operadores por las citadas infraestructuras.

• **REAL DECRETO 1287/1999, de 23 de julio**, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal.

(BOE núm. 177, de 26 julio 99)

La Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su Disposición adicional cuadragésima cuarta, regula el régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal, fijando, en su apartado 3, la necesidad de la aprobación por el Ministerio de Fomento, del Reglamento técnico y de prestación de los servicios, con carácter previo al comienzo de la actuación de los operadores que empleen esta tecnología. También, se exige como requisito previo, de acuerdo con el apartado 4, la aprobación por el Gobierno del Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal.

El Real Decreto que aquí se comenta tiene por objeto aprobar el Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal, en cum-

plimiento de lo establecido en la citada Disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se compone de un artículo único por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal que figura como anexo al mismo, de cuatro Disposiciones adicionales y de una Disposición final única sobre la entrada en vigor del mismo. La primera Disposición adicional establece reglas para la introducción de la tecnología digital en los ámbitos nacional, autonómico y local, y la segunda y tercera, del empleo de las infraestructuras de red soporte del servicio y de la promoción del uso de infraestructuras ya existentes.

Como se establece en la Exposición de Motivos, los recientes avances tecnológicos en este campo, impulsados por la Unión Europea de radiodifusión, han permitido la aparición y el desarrollo de la radiodifusión sonora digital, cuya introducción supondrá un cambio trascendental en la radiodifusión sonora, tanto por la calidad del sonido como por las posibilidades de oferta de un gran número de servicios adicionales, permitiendo configurar fácilmente coberturas de programas en los diferentes ámbitos, nacional, autonómico y local. Por otro lado, y desde un punto de vista técnico, resulta de interés destacar que este nuevo sistema simplifica la gestión de las frecuencias, permitiendo una mayor eficacia en su utilización y ofreciendo una recepción de la señal prácticamente sin interferencias.

Finalmente, hay que destacar que en la elaboración del Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal se ha procurado que exista una oferta de frecuencias equivalente para la cobertura estatal y para la autonómica y local, y se ha tenido especialmente en cuenta la especificidad del hecho insular, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LGTel.

• **REAL DECRETO 1289/1999, de 23 de julio**, por el que se crea la Comisión Inter-

nisterial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías de España.

(BOE núm. 178, de 27 julio 99)

En la Exposición de Motivos del Real Decreto comentado el Gobierno, consciente de la importancia del papel que le corresponde en el impulso de la sociedad de la información en España, presenta como objetivos primordiales que inspiren sus actuaciones en este sentido los siguientes:

a) Promover la generación y el desarrollo de las tecnologías de la sociedad de la información; b) estimular la adopción y el uso generalizado de dichas tecnologías por las empresas, especialmente PYMES y los ciudadanos; c) impulsar la adopción de las nuevas tecnologías por parte de la Administración, en beneficio de ciudadanos y empresas; d) aprobar el marco normativo más adecuado, y e) asegurar la mayor atención de la Administración hacia las necesidades de la sociedad.

A tal efecto, y con el propósito de coordinar las actuaciones de todos los Departamentos ministeriales competentes y facilitar así la obtención de los mejores resultados en su tarea de promover el impulso de la sociedad de la información en España, así como el desarrollo de las tecnologías que constituyen su sustrato, el Consejo de Ministros creó, por medio de este Real Decreto, la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías adscrita al Ministerio de Industria y Energía.

Esa Comisión, según el Real Decreto comentado, tiene por objeto la elaboración, del desarrollo y la evaluación de la iniciativa estratégica del Gobierno en relación con la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. Con ello se pretende asegurar el carácter armónico e integrador de todas las propuestas contenidas en la iniciativa, facilitando las actuaciones conjuntas de los diversos organismos con competencias en la materia sin que ello implique la centralización de la gestión ni la absorción de la competencias que actualmente corresponden a los diferentes Departamentos ministeriales.



Este Real Decreto, además de crear la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías, establece cuáles son sus funciones, sus órganos de actuación, su composición, su financiación y la forma de colaborar de ésta con las Comunidades Autónomas.

- **REAL DECRETO 1337/1999, de 31 de julio**, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

(BOE núm. 185, de 4 agosto 99)

Este Real Decreto tiene por objeto regular la forma en la que se ha de realizar la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información a la Comisión Europea y, en su caso, a los organismos europeos de normalización y a los organismos nacionales de normalización pertenecientes a los Estados miembros de la Comunidad Europea.

Su promulgación incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 98/48/CE y unifica en un solo texto la incorporación al mismo de las previsiones de la citada Directiva y la Directiva 98/34/CE, para lo cual deroga el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el que se regulaba la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.

Este Real Decreto prevé la obligaciones del organismo español de normalización de comunicar a la Comisión Europea, a los organismos europeos de normalización y a los organismos nacionales de normalización de los demás Estados miembros, con la periodicidad y los requisitos exigidos por la Directiva 98/34/CE, los programas de normalización establecidos y los proyectos de normas que pretendan adoptar. Asimismo, instrumenta la comunicación previa a la Comisión Europea de los proyectos de reglamentos técnicos y de los reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información que las Administraciones públicas pretendan aprobar. Para

facilitar el cumplimiento de tales obligaciones se designa a la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea (creada por Real Decreto 1567/1985, de 2 de septiembre) como la instancia única a través de la que se canaliza la comunicación de proyectos y el intercambio de información con la Unión Europea.

- **REAL DECRETO 1462/1999, de 17 de septiembre**, por el que se aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir, y se desarrollan otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

(BOE núm. 233, de 29 septiembre 99)

El objeto del Real Decreto que se comenta es el de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 25/1994, de 12 de julio (en la redacción dada por la Ley 22/1999, de 7 de junio), por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

El citado precepto establece que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.d) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, constituye un derecho de los telespectadores, en cuanto usuarios, el conocer, con la antelación suficiente, la programación de televisión, incluidas las películas cinematográficas y la retransmisión de espectáculos. Asimismo, establece que el Gobierno y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en sus respectivas competencias deberán desarrollar reglamentariamente el procedimiento para hacer efectivo tal derecho.

El Real Decreto se compone de un artículo único por el que se aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir, y se desarrollan otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley

22/1999, de 7 de junio. El citado Reglamento se incluye como Anexo al Real Decreto.

• **ORDEN de 26 de marzo de 1999** por la que se establecen las condiciones para la provisión del acceso indirecto al bucle de abonado de la red pública telefónica fija.

(BOE núm. 86, de 10 abril 99)

Como consecuencia de la utilización creciente de la red telefónica para el acceso a Internet, se ha planteado la necesidad de impulsar la implantación de nuevos elementos tecnológicos en la red telefónica que permitan una oferta significativa de tarifas planas para el acceso a Internet (esto es, precio fijo con independencia del periodo de tiempo en que éste se produzca), ya que su actual diseño, al estar orientado a atender comportamientos de los usuarios para llamadas de voz y tarificación dependiente del tiempo de uso, no se adapta a la naturaleza de los servicios de acceso a Internet.

Para ello, se requiere el uso de tecnologías innovadoras en el bucle de abonado que permitan, coexistiendo con el servicio telefónico tradicional, el acceso indirecto a dicho bucle. En la actualidad, las tecnologías que hacen posible esta separación de los servicios sobre el tradicional par de cobre son las denominadas tecnologías en Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL).

Las tecnologías ADSL constituyen una nueva plataforma para la prestación de servicios que requieran un mayor ancho de banda que el tradicional servicio telefónico. En concreto, se trata de un acceso asimétrico de velocidades de transmisión elevadas que posibilita la conexión entre dos puntos extremos como son los usuarios y el prestador del servicio, con la posibilidad de seleccionar el usuario una de entre varias velocidades y permitir la facilidad de conexión permanente sin que sea necesario la marcación para establecer la conexión en cada llamada.

El Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento relativo a la

interconexión y al acceso a las redes públicas y a la numeración, establece en el punto 4 del artículo 9 que el Ministerio de Fomento determinará, previo informe de la CMT, la fecha y las condiciones en las que los operadores de las redes públicas de telecomunicaciones que tengan la consideración de dominantes facilitarán el acceso al bucle de abonado.

La presente Orden Ministerial, que regula el acceso indirecto al bucle de abonado, se dicta en desarrollo del referido Reglamento, sin perjuicio de las posteriores actuaciones que, en relación con el acceso al bucle de abonado y en desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento, pudieran adoptarse por la Administración.

Por su parte, corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos fijar los precios que los operadores autorizados deberán abonar al operador dominante TELEFÓNICA, S.A., como contraprestación por el acceso indirecto al bucle de abonado de la red pública telefónica fija.

Con la implementación de la Orden comentada no sólo podrá materializarse la oferta de tarifas planas para el acceso a Internet en los ámbitos del sector residencial, PYMES y centros educativos y sanitarios (dando una respuesta a lo instado por el Pleno del Congreso de los Diputados), sino que se potenciará la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos servicios en el marco de la sociedad de la información, al proveerse un ancho de banda muy superior al actual con la posibilidad de utilizar aplicaciones que presenten mayores requerimientos.

Finalmente, en esta Orden se establece un periodo de tiempo para implantar esta tecnología de ADSL en la red fija telefónica, siendo de interés destacar que se deberá realizar de forma progresiva, dada la necesidad de actuar directamente sobre la línea de acceso de cada abonado, para adecuar la instalación física a la provisión del acceso.

Respecto a la red telefónica de TELEFÓNICA, S.A., se establecen dos fases de implantación:

una primera que transcurrirá durante los años 1999 y 2000, con unas previsiones de cobertura del 61 por 100 de las líneas de la red telefónica, y una segunda, en que se hará un estudio para el establecimiento del ADSL en la totalidad del territorio nacional.

- **ORDEN de 23 de julio de 1999** por la que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora Digital Terrenal.

(BOE núm. 177, de 26 julio 99)

Como ya se ha comentado anteriormente, la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su Disposición adicional cuadragésima cuarta, regula el régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal. En su apartado 3 se establece expresamente la necesidad de la aprobación del Reglamento técnico y de prestación de los servicios de manera previa al comienzo de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal.

La Orden Ministerial que aquí se comenta tiene por objeto la aprobación de este Reglamento técnico y de prestación de los servicios, en virtud del cual se desarrolla reglamentariamente el régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal.

Por su parte, la gestión directa de la radiodifusión sonora digital terrenal corresponde al Ente Público Radio Televisión Española, de acuerdo con el artículo 5.1 del Estatuto de la Radio y la Televisión, aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, y a los entes públicos de las Comunidades Autónomas conforme se dispone en el artículo 26 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Por otro lado, la gestión indirecta se llevará a cabo con arreglo a las previsiones contenidas en el artículo 26 y a la Disposición Adicional sexta de la citada Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

En este Reglamento se regulan las formas de gestión del citado servicio, esto es, la gestión directa y la indirecta, así como el otorgamiento

de los títulos habilitantes y el régimen jurídico de la concesión.

- **ORDEN de 23 de julio de 1999** por la que se regula el Registro de Asignaciones y Reservas de Recursos Públicos de Numeración.

(BOE núm. 187, de 6 de agosto de 1999. Corrección de errores, BOE núm. 238, de 5 octubre 99)

El artículo 20 del Reglamento de procedimiento para la asignación y reserva de recursos públicos de numeración por la CMT, aprobado por el Real Decreto 225/1998, de 16 de febrero, crea el Registro de asignaciones y reserva de los recursos públicos de numeración y encomienda su gestión a la CMT.

Por su parte, la Disposición Final primera del mencionado Real Decreto habilita al Ministro de Fomento para determinar los datos que deben ser objeto de inscripción en el Registro y las normas reguladoras del mismo.

Esta Orden tiene por objeto determinar las reglas y normas de funcionamiento del Registro de asignaciones y reservas de recursos públicos de numeración, y precisa los datos y circunstancias que han de ser inscritos, la modificación de los ya inscritos, así como las formalidades de los libros, el modo de practicar los asientos y la publicidad del Registro. Asimismo, también se regulan en el último artículo las reglas sobre la cancelación de la inscripción.

Finalmente, se establece que la CMT, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Orden, procederá a la inscripción de oficio en este Registro de todos los recursos de numeración que disponga TELEFÓNICA, S.A., así como de todas aquellas asignaciones y reservas efectuadas con anterioridad al 7 de agosto de 1999, fecha en la que entró en vigor este Reglamento.

- **ORDEN de 23 de julio de 1999** por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la designación de los laboratorios a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento por el

que se establece el procedimiento de certificación de equipos de telecomunicación.

(BOE núm. 187, de 6 agosto 99)

El Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, aprobó el Reglamento que establece el procedimiento de certificación para los equipos de telecomunicación a los que se refería el artículo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, derogado por la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones. El artículo 31 del citado Reglamento atribuye al Ministerio de Fomento la competencia para establecer los requisitos y procedimientos de designación de los laboratorios a los que podrá dirigirse el solicitante del certificado de examen de tipo (o certificado de examen CE de tipo en caso de aplicarse normas técnicas armonizadas) para la realización de los ensayos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que sean de aplicación.

En desarrollo de esta competencia se dicta la Orden comentada, que viene a establecer el procedimiento de designación de laboratorios por la Secretaría General de Comunicaciones, las obligaciones de dichos laboratorios una vez designados en cuanto al mantenimiento de las condiciones que la posibilitaron, las causas de extinción de la misma y la realización de ensayos en ausencia de laboratorios designados, cuando existan laboratorios en proceso de obtención de la designación.

• **ORDEN de 24 de agosto de 1999** por la que se establecen las localidades a cubrir en la fase de introducción de la radiodifusión sonora digital terrenal.

(BOE núm. 209, de 1 septiembre 99)

En el artículo 7 del Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal, aprobado por el comentado Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio, se establecen las distintas fases y fechas para la introducción e implantación del servicio de radiodifusión sonora digital terrenal, así como los porcentajes mínimos de cobertura

de la población que deben alcanzarse en cada ámbito territorial.

El apartado 5 del citado artículo 7 del Plan Técnico Nacional dispone que por Orden del Ministerio de Fomento se establecerán las localidades principales a cubrir en cada fase. En su virtud, la Orden comentada establece las poblaciones y el porcentaje de cobertura de la población que deben alcanzarse en las cuatro fases del Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal.

• **ORDEN de 15 de septiembre de 1999** por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y se convoca licitación para el otorgamiento de dos licencias individuales de tipo C2 para el establecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria para la explotación del servicio de radiocomunicaciones móviles terrestres en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital.

(BOE núm. 227, de 22 septiembre 99)

Esta Orden permite la aplicación en España del sistema de radiocomunicaciones móviles en grupo cerrado de usuarios conocido por las siglas TETRA, que supone un avance sobre las prestaciones actuales de los sistemas analógicos, en especial en cuanto a la posibilidades de transmisión de datos. Asimismo, se facilita la interoperabilidad con otros servicios, en especial los basados en tecnologías GSM, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el marco regulatorio de la interconexión.

• **ORDEN de 7 de octubre de 1999** por la que se aprueba el pliego de cláusulas para la adjudicación de tres licencias individuales de tipo C2 para el establecimiento y explotación de redes públicas fijas de acceso radio en la banda de 26 GHz.

(BOE núm. 242, de 9 octubre 99)

• **ORDEN de 7 de octubre de 1999** por la que se aprueba el pliego de cláusulas para la adjudicación de tres licencias individuales de

tipo C2 para el establecimiento y explotación de redes públicas fijas de acceso radio en la banda de 3,4 a 3,6 GHz.

(BOE núm. 242, de 9 octubre 99)

Las dos Órdenes anteriores que aquí se comentan permiten la implantación de redes de acceso inalámbricas fijas, lo cual supone la introducción de una posibilidad alternativa a la red del operador dominante, junto a las redes de cable y a las redes implantadas por los nuevos operadores con licencias B1. Se posibilita un despliegue más rápido del acceso directo a los servicios de telecomunicaciones prestados por los nuevos operadores. El modelo de despliegue de estas redes que se prevé en las Órdenes configura una multiplicidad de redes de acceso, inconexas entre sí pero teniendo en común el mismo juego de frecuencias, como objeto de cada licencia para todo el territorio nacional. Estas redes, y en especial las de la banda de frecuencias de 26 GHz, permiten servicios de comunicaciones de banda ancha, lo cual incrementa la disponibilidad de estos servicios, complementariamente a la implantación de otras tecnologías, como las redes de cable o el acceso al bucle local mediante ADSL. Debe hacerse mención de que se prevé la licitación de dos licencias adicionales en la banda de 28 GHz durante el año 2000.

- **ORDEN de 14 de octubre de 1999** por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

(BOE núm. 250, de 19 octubre 99. Corrección de errores, BOE núm. 281, de 24 noviembre 99)

La Orden comentada tiene por objeto fijar los objetivos y condiciones de calidad en la prestación de los servicios a los que se refiere el artículo 8 del Reglamento de Servicio Universal, y aplicables a los operadores que tengan reconocidos derechos de ocupación de la propiedad privada o pública, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de Servicio Universal, y a los que se refiere la Disposición adicional quinta y los

apartados I.1, I.2 y II.8 del Anexo I de la Orden de Licencias.

Se excluye expresamente de su ámbito, conforme se expresa en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Orden, la regulación de las condiciones, los objetivos y elementos de calidad del servicio relativos al servicio universal y a los servicios obligatorios, que se regirán por su normativa específica.

Por lo que respecta al ámbito subjetivo se deja claro que será de aplicación a los titulares de licencias individuales que estén en algunos de los siguientes supuestos:

- Dominantes en la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público o en la prestación del servicio de líneas susceptibles de arrendamiento.
- No teniendo la consideración de dominantes, los habilitados para la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público o en la prestación del servicio de líneas susceptibles de arrendamiento, con obligaciones de servicio público al tener en su licencia reconocido derecho de ocupación de la propiedad pública o privada (artículo 44 Reglamento de Servicio Universal) y hayan transcurrido 18 meses desde el otorgamiento de dicha licencia.
- Los habilitados para la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público o en la prestación del servicio de líneas susceptibles de arrendamiento con obligaciones de servicio público (sin reunir las circunstancias anteriores) y hayan transcurrido 18 meses desde el otorgamiento de dicha licencia.

En definitiva, las condiciones y objetivos de calidad exigibles a cada titular serán las relativas a la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público y a la del servicio de líneas susceptible de arrendamiento.

Por su parte, estos titulares deberán implantar un sistema de medida y seguimiento de los niveles de calidad en la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público y en la del



servicio de líneas susceptible de arrendamiento, basado en los parámetros establecidos en los anexos I y II de la Orden.

Este sistema deberá estar establecido de forma debidamente documentada y desarrollada para permitir tanto una inspección por los Servicios de la Secretaría como una Auditoría por una entidad independiente. Se deberá remitir una copia de esta documentación y su actualización a la Secretaría, y las modificaciones que deban hacerse al mismo se harán lo más rápidamente posible.

Se establece que el período de observación para evaluar la adecuada aplicación de los parámetros de calidad será trimestral (comenzando el 1 de enero), y al mes siguiente deberán remitir un informe a la Secretaría con los niveles de calidad del servicio medido.

Al finalizar cada año natural, los citados titulares deberán encargar una auditoría externa a una entidad solvente e independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones de calidad del servicio que se deriven de la aplicación de esta Orden, y copia de ésta deberá enviarse a la Secretaría.

Función relevante para los servicios de la inspección de la Secretaría resulta del artículo 7 de la presente Orden al permitir las inspecciones que estimen oportunas para verificar la fiabilidad de los datos suministrados por cada titular.

Se constituirá una Comisión para el seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios, con la finalidad de asesorar al Ministerio de Fomento en la implantación del sistema de seguimiento, los problemas prácticos y su evolución futura.

Por otro lado, y de conformidad con la Disposición Adicional primera, en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Orden, el Ministerio de Fomento establecerá las condiciones de calidad del servicio de telefonía móvil disponible al público prestado a través de redes terrestres. Dichas condiciones se referirán, al menos,

a los indicadores del Anexo III de la Orden (porcentajes de llamadas no completadas, interrumpidas, número de reclamaciones sobre facturación).

Resulta de interés destacar en la presente norma que, el Ministerio de Fomento efectuará el seguimiento de la calidad del servicio que proporcionan los titulares de autorizaciones generales del tipo C registrados como proveedores de acceso a internet, al objeto de evaluar los niveles de calidad que perciben los usuarios. Los parámetros serán: el tiempo de respuesta y la velocidad que se garantiza en las comunicaciones.

Asimismo, los proveedores darán información a los usuarios en particular con respecto a estos parámetros, y las llamadas no completadas por causas imputables al operador de la red pública telefónica fija de acceso a Internet no serán facturadas al usuario.

Finalmente, respecto al plazo de aplicación de esta Orden, los titulares de licencias individuales, que a la fecha de entrada en vigor de esta Orden estén dentro de su ámbito subjetivo, deberán remitir el primer informe a la Secretaría, correspondiente a los niveles de calidad del trimestre natural que empiece una vez transcurridos dos meses desde la publicación de esta Orden.

• **ORDEN de 14 de octubre de 1999** sobre condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112.

(BOE núm. 252, de 21 octubre 99)

El artículo 40 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, determina que el encaminamiento de llamadas a los servicios de emergencia será a cargo de los operadores, debiendo asumir esta obligación tanto los que presten servicios telefónicos disponibles al público como los que exploten redes públicas de telecomunicaciones que soporten servicios telefónicos, imponiéndose inicialmente esta obliga-



ción respecto de las llamadas de urgencia dirigidas al número 112, de manera que éstas serán gratuitas para los usuarios.

Por otro lado, el artículo 41 de la citada Ley establece que en la prestación de los servicios de emergencia el déficit de explotación o, en su caso, la contraprestación económica que deba satisfacerse a quien se encomienda la prestación, se financiará con cargo a los presupuestos de la Administración que tenga asignada la obligación de llevar a cabo los servicios obligatorios referidos. Dado que el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112 se lleva a cabo por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa vigente, resulta que el coste de la prestación del servicio en cuestión, como servicio público obligatorio de telecomunicaciones, será asumido, en lo referente al encaminamiento de las llamadas, por los operadores de telecomunicaciones, y en lo relativo a los centros de atención de llamadas y demás necesidades para la correcta prestación del servicio, por las Comunidades Autónomas.

En este sentido, el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112, concreta que los operadores de telecomunicaciones, aparte de asumir el coste de las llamadas, facilitarán la identificación automática de la línea o zona geográfica desde donde se efectúen dichas llamadas, dentro de las posibilidades técnicas de las redes y de acuerdo con la normativa reguladora de las facilidades de presentación y limitación de la línea llamante. Para una más eficaz prestación del servicio, las entidades prestatarias del servicio de llamadas de urgencia necesitan conocer, además, la dirección del titular de la línea telefónica fija o la localidad geográfica (servicios móviles) desde la que se ha efectuado la llamada. La Orden comentada viene a regular estos aspectos, de modo que se establecen los operadores obligados a suministrar información, la información que deben facilitar, la periodicidad para hacerlo y las condiciones para utilizarla, así como la contraprestación económica por ello.

Por último, se establece que la información referida también podrá solicitarse por las entidades prestatarias a la CMT, a medida que ésta lo vaya teniendo disponibles.

- **ORDEN de 26 de octubre de 1999** por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero.

(BOE núm. 268, de 9 noviembre 99. Corrección de errores, BOE núm. 304, de 21 diciembre 99)

Por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, ya comentado, se aprobó el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Por su parte, la Disposición final primera del citado Real Decreto autoriza al Ministro de Fomento para dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el mismo.

Esta Orden tiene por objeto aprobar el contenido y la estructura del proyecto técnico necesario para la ejecución de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios, incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento mencionado anteriormente, y establecer los modelos de certificado y de boletín de instalación, como comprobantes de su correcta ejecución y los casos en que se deben emplear uno y otro, dando cumplimiento así a lo establecido en los artículos 8 y 9 del citado Reglamento.

Asimismo, y en virtud de la previsión establecida en el artículo 14 del mismo Reglamento, esta Orden tiene por objeto establecer la cualificación y los medios técnicos necesarios exigibles a quienes deseen acceder a la condición de

instalador de telecomunicación y, por lo tanto, para su inscripción en el registro de instaladores de telecomunicación que existe en la Secretaría General de Comunicaciones.

- **ORDEN de 10 de noviembre de 1999** por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por concurso, mediante procedimiento abierto, de cuatro licencias individuales de tipo B2 para el establecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria y para la explotación del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación.

(BOE núm. 270, de 11 noviembre 99)

El otorgamiento de las cuatro licencias de tipo B2 para redes y servicios de comunicaciones móviles de tercera generación supone un avance cualitativo sobre las actuales redes de segunda generación basadas en las tecnologías GSM en las bandas de frecuencias de 900 Mhz y 1.800 Mhz. Se enmarca en el proceso de implantación de estas redes y servicios de tercera generación que se está llevando a cabo a nivel mundial. En Europa se ha impulsado este desarrollo mediante la Decisión n.º 128/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 1998 relativa a la introducción coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad.

Esta Decisión define el UMTS como el sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación con capacidad para servir de soporte, en particular, a servicios multimedia que superen las posibilidades de los sistemas actuales de segunda generación, como el GSM, y con capacidad para un uso combinado de componentes terrestres y de satélites. El sistema deberá tener capacidad suficiente para garantizar al menos las siguientes características:

- Capacidad multimedia; aplicaciones con movilidad plena y movilidad reducida en diferentes entornos geográficos que sobrepasen la capacidad de los sistemas de segunda generación, como GSM.

- Acceso eficaz a Internet, a redes Intranet y a otros servicios basados en el Protocolo Internet (IP). (La implantación de los nuevos sistemas UMTS continuará así la evolución que, en el ámbito de los sistemas GSM, está suponiendo la implantación de tecnologías WAP y GPRS).

- Transmisión vocal de alta calidad, comparable a la de las redes fijas.

- Portabilidad de los servicios en distintos entornos UMTS cuando proceda (p.e. público/privado/negocios; fijo/móvil).

- Funcionamiento en entorno integral sin solución de continuidad que permita una itinerancia total con las redes GSM y entre los componentes terrestres y de satélite de las redes UMTS.

Debe destacarse que a efectos del concurso se posibilita la presentación de propuestas basadas no sólo en el estándar europeo UMTS sino también en las demás normas de comunicaciones móviles de tercera generación encuadradas en las recomendaciones de la UIT sobre IMT-2000.

- **RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1999, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones**, por la que se hace pública la Circular 1/1999, de 4 de noviembre, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre la implantación de la preasignación de operador por los operadores dominantes en el Mercado de Redes Públicas de Telecomunicación Fijas.

(BOE núm. 270, de 11 noviembre 99. Corrección de errores, BOE núm. 277, de 19 noviembre 99)

La facilidad de preasignación o preselección de operador permite que los usuarios puedan fijar por adelantado el operador que desean que curse sus llamadas de larga distancia, sin necesidad de anteponer el código de selección de operador seleccionando en cada llamada.

Como se dice en el Anexo de la Circular comentada, esta modalidad de acceso constituye una

herramienta esencial para la introducción y el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de los servicios de telefonía disponibles al público, dado que permite establecer unas condiciones de marcación equivalente para los distintos operadores, sin diferencias entre el operador que provee el acceso y el de larga distancia.

De conformidad con la Orden de 18 de julio de 1997, por la que se establecen los procedimientos y condiciones para la selección y preasignación de operador en las llamadas de larga distancia, el Reglamento relativo a la interconexión y al acceso de redes públicas y a la numeración aprobado por Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, los operadores de redes telefónicas públicas fijas que tuvieran la consideración de dominantes estaban obligados a implantar en su red, antes del 30 de noviembre de 1998, los mecanismos de preasignación de operadores, las líneas de abonado conectadas a centrales telefónicas digitales, para los servicios telefónicos de larga distancia y para los de telefonía móvil automática, y los de comunicaciones móviles personales.

En el marco de los acuerdos de interconexión, de conformidad con la Resolución de 18 de junio de 1998 de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se aprueba las especificaciones técnicas para la preasignación de operador, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., deberá negociar con los operadores habilitados el desarrollo y la aplicación de estos procedimientos en todos los aspectos que fueran necesarios para las partes.

Por su parte, el Real Decreto-Ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones estableció un nuevo calendario para que la preasignación de operador se instaure en España.

Tal y como se indicó en el Anexo de esta Circular, en la fecha de aprobación de la misma aún no se habían implantado por el operador dominante los necesarios mecanismos de preasignación

de operador en las líneas de abonados conectadas a centrales telefónicas digitales.

A este respecto, la demora injustificada de esta facilidad por el operador dominante sería susceptible de constituir un comportamiento contrario a la libre competencia, por lo que la CMT, en virtud de lo dispuesto al artículo 1.Dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, ha dictado la presente Circular sobre la implantación de la preasignación de operador por los operadores dominantes en el Mercado de Redes Públicas de Telecomunicación Fijas, en el ejercicio de sus funciones y, en concreto, para la salvaguarda de la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

• **RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones**, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración a los servicios de selección de operador y se liberan ciertos números cortos de tres cifras.

(BOE núm. 181, de 30 julio 99)

El objeto de esta Resolución es doble. Por un lado, y a petición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en base a su Acuerdo de 22 de abril de 1999, la Secretaría General de Comunicaciones atribuye códigos de selección de operador adicionales de cuatro cifras para atender la previsible demanda que se va a producir en un futuro inmediato. Por otro, se liberan ciertos números cortos no asignados formalmente y que son marcados habitualmente de forma automática por el equipo terminal de datos conectado a la red.

En cuanto a la primera cuestión, se modifica la Resolución de 2 de abril de 1998, en cuanto establecía longitudes de cuatro, cinco y seis cifras en las cantidades respectivas 15, 40 y 100 códigos, atribuyendo los códigos «103» y «104» al servicio de selección de operador de llamada a llamada. Estos códigos van seguidos de una, dos o tres cifras identificativas del operador, según los formatos establecidos.

Por lo que se refiere a la segunda cuestión, se establece que determinados números cortos utilizados para el acceso a diversos servicios de datos deban ser liberados antes del 1 de julio de 2000, habilitando una secuencia al objeto de posibilitar la continuidad de dichos servicios.

- **RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones**, que modifica la de 2 de abril de 1998 por la que se atribuyen determinados códigos de selección de operador.

(BOE núm. 305, de 22 diciembre 99)

La Secretaría General de Comunicaciones atribuyó, mediante Resolución de 2 de abril de 1998, determinados códigos de selección de operador de tres y cuatro cifras. En principio, la atribución de los primeros tenía validez hasta el día 31 de diciembre de 1999, estableciendo que los períodos de marcaciones en paralelo de los códigos de tres y cuatro cifras que se asignen a un mismo operador deberían finalizar, en todo caso, antes del 1 de enero de 2000. Por diversas razones, se hace necesaria una ampliación de los plazos establecidos para minimizar los inconvenientes derivados de los mismos y que se habían puesto de manifiesto.

Por ello, esta Resolución establece un período de marcación en paralelo de los códigos de tres y cuatro cifras que se asignen a un mismo operador que deberá finalizar antes del día 1 de febrero del año 2000. Desde el día 1 de mayo de 2000, los códigos de selección de operador con formato «05Y» quedarán liberados de esta utilización, estando disponibles para su atribución de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Numeración de Servicios de Telecomunicación, estableciéndose un período de locuciones informativas de tres meses, a contar desde la fecha de finalización de los períodos de marcaciones en paralelo.

## B) Otras disposiciones de interés

### a) De carácter general

- **LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre**, de Protección de Datos de Carácter Personal.

(BOE núm. 298, de 14 diciembre 99)

- **INSTRUMENTO de Ratificación** del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y del Instrumento de Enmienda al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios el 14 de octubre de 1994 en Kyoto.

(BOE núm. 130, de 1 junio 99)

- **LEY 6/1999, de 1 de septiembre**, del Audiovisual de Galicia.

(BOE núm. 236, de 2 octubre 99)

- **REAL DECRETO 2887/1998, de 23 de diciembre**, por el que se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión directa del tercer canal de televisión.

(BOE núm. 10, de 12 enero 99)

- **REAL DECRETO 994/1999, de 11 de junio**, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

(BOE núm. 151, de 25 junio 99)

- **ORDEN de 9 de abril de 1999** por la que se aprueban los modelos de impresos para la liquidación de las tasas establecidas en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.

(BOE núm. 92, de 17 abril 99. Corrección de errores, BOE núm. 112, de 11 mayo 99)

- **ORDEN de 25 de mayo de 1999** por la que se declara la utilización compartida del dominio

público viario de las carreteras que integran la Red de interés general del Estado, a efectos de la instalación de redes públicas de telecomunicaciones.

(BOE núm. 125, de 25 mayo 99)

- **ORDEN de 19 de mayo de 1999** por la que se rectifica y se salvan errores de la Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares.

(BOE núm. 136, de 8 junio 99)

- **RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se dictan instrucciones a «TELEFÓNICA, S.A.» en relación con la prestación del servicio telefónico soporte de los servicios de tarificación adicional.

(BOE núm. 2, de 2 enero 99)

- **RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se adjudican recursos públicos de numeración a determinadas provincias.

(BOE núm. 48, de 25 febrero 99)

- **RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999**, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se crean los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la citada Comisión.

(BOE núm. 188, de 7 agosto 99)

#### b) Telecomunicaciones por cable

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Avilés-Castrillón-Corvera de Asturias, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Castilla y León constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la Demarcación Territorial de Cataluña Nordeste (zona 2 de Cataluña), constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se modifican las concesiones para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable otorgadas en la demarcación territorial de Barcelona (zona 1 de Cataluña), como consecuencia de la ampliación efectuada en el ámbito de la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la Demarcación Territorial de Cataluña Oeste (zona 3 de Cataluña), constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la Demarcación Territorial de Extremadura, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifica la concesión otorgada en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la Demarcación Territorial de



Palma de Mallorca, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la Demarcación Territorial de Oviedo, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 2 de diciembre de 1998** por la que se amplía la Demarcación Territorial de Gijón, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable, y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** por la que se resuelve el concurso público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Torrent.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** por la que se resuelve el concurso público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Sanlúcar de Barrameda.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** por la que se resuelve el concurso público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Melilla.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** por la que se resuelve el concurso público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Ceuta.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** de verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a «TELEFÓNICA, S.A.», para obtener y ejercitar el derecho a la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Sanlúcar de Barrameda.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998**, de verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a «TELEFÓNICA, S.A.», para obtener y ejercitar el derecho a la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Torrent.

(BOE núm. 18 de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** de verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a «TELEFÓNICA S.A.», para obtener y ejercitar el derecho a la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Melilla.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)

- **ORDEN de 3 de diciembre de 1998** de verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a «TELEFÓNICA, S.A.», para obtener y ejercitar el derecho a la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Ceuta.

(BOE núm. 18, de 21 enero 99)





- **ORDEN de 16 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Comunidad Valenciana Norte, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 16 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Comunidad Valenciana Sur, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial Andalucía I (Almería, Jaén y Granada), constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Andalucía II (Málaga y Córdoba), constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial Andalucía III (Sevilla), constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29; de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Madrid Sur-Este, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por

cable y se modifican las concesiones otorgadas en las mismas.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Madrid Sur-Oeste, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Comunidad Foral de Navarra, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 21 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Madrid Norte, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 22 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Aragón, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 22 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Euskadi, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 22 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Galicia, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

- **ORDEN de 30 de diciembre de 1998** por la que se amplía la demarcación territorial de Andalucía IV, constituida para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y se modifican las concesiones otorgadas en la misma.

(BOE núm. 29, de 3 febrero 99)

### c) Especificaciones técnicas y reglamentación técnica común

- **ORDEN de 28 de diciembre de 1998** por la que se establecen las especificaciones técnicas de los repetidores radio isofrecuencia para el servicio móvil terrestre.

(BOE núm. 25, de 29 enero 99)

- **ORDEN de 27 de enero de 1999** por la que se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales de telecomunicación que se conecten a circuitos alquilados digitales a 64 kbit/s, utilizando la interfaz definida por la recomendación V.35 del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).

(BOE núm. 36, de 11 febrero 99)

- **ORDEN de 27 de enero de 1999** por la que se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales de telecomunicación que se conecten a circuitos alquilados digitales a 64 kbit/s utilizando la interfaz definida por las recomendaciones V.10-V.11/V.24 del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).

(BOE núm. 37, de 12 febrero 99)

- **ORDEN de 27 de enero de 1999** por la que se publican las referencias a las normas UNE TBR-15 y UNE TBR-17, contenidas en las reglamentaciones técnicas comunes CTR-15 y CTR-17 para equipos terminales de telecomunicación destinados a conectarse a líneas analógicas arrendadas de 2 y 4 hilos, respectivamente.

(BOE núm. 42, de 18 febrero 99)

- **ORDEN de 27 de enero de 1999** por la que se publica la referencia a la Norma UNE-TBR-21, contenida en la Reglamentación Técnica Común CTR 21 para equipos terminales de telecomunicación, relativa a los requisitos de conexión para la certificación paneuropea a efectos de conexión a redes telefónicas públicas con conmutación (RTPCs) analógicas del equipo terminal (excluyendo el ET que soporta el servicio de telefonía vocal) en los que el direccionamiento de red, si se proporciona, se efectúa por medio de la señalización multifrecuencia por doble tono (MFDT).

(BOE núm. 42, de 18 febrero 99)

- **ORDEN de 26 de febrero de 1999** por la que se establecen las especificaciones técnicas de las estaciones terrestres del sistema TETS.

(BOE núm. 62, de 13 de marzo 99)

- **ORDEN de 9 de abril de 1999** por la que se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales que se conecten a circuitos alquilados digitales de 2 Mbit/s y trama estructurada utilizando la interfaz asimétrica definida por la recomendación G.703 del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).

(BOE núm. 97, de 23 abril 99)

- **ORDEN de 9 de abril de 1999** por la que se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales que se conecten a circuitos alquilados digitales de 2 Mbit/s y trama no estructurada, utilizando la interfaz asimétrica definida por la recomendación G.703 del Comi-

té Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).

(BOE núm. 97, de 23 abril 99)

- **ORDEN de 26 de noviembre de 1999** por la que se modifican las especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas multilínea de abonado destinados a ser utilizados por equipos terminales.

(BOE núm. 293, de 8 diciembre 99)

- **RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publica la referencia de la norma UNE-TBR-34, contenida en la Reglamentación Técnica Común CTR-34, para los equipos terminales en modo paquete que se conecten a un acceso primario RDSI.

(BOE núm. 52, de 2 marzo 99)

- **RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la norma UNE-TBR-33, contenida en la reglamentación técnica común CTR-33 para los equipos terminales en modo paquete que se conecten a un acceso básico RDSI.

(BOE núm. 52, de 2 marzo 99)

- **RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publica la referencia de la norma UNE-TBR-19, equivalente a la contenida en la reglamentación técnica común CTR-19, relativa a los requisitos generales de conexión aplicables a las comunicaciones móviles terrestres celulares digitales paneuropeas públicas, fase II (segunda edición).

(BOE núm. 240, de 7 octubre 99)

#### d) Tarifas

- **ORDEN de 7 de enero de 1999** sobre tarifas del servicio portador de trayectos virtuales

«Gigacom», prestado por «TELEFÓNICA, S.A.».

(BOE núm. 19, de 22 enero 99)

- **ORDEN de 11 de febrero de 1999**, sobre un criterio general y el programa de descuentos para tarifas de acceso a «Internet» a través de la red telefónica fija de «TELEFÓNICA, S.A.».

(BOE núm. 45, de 22 de febrero 99)

- **ORDEN de 11 febrero de 1999** sobre modificación de los programas de descuentos denominados «Plan Negocio Total» y «Plan Negocio Destino», de «TELEFÓNICA, S.A.».

(BOE núm. 45, de 22 de febrero 99)

- **ORDEN de 11 de febrero de 1999** sobre tarifas para dos nuevas zonas del servicio telefónico internacional que presta «TELEFÓNICA, S.A.», correspondientes a comunicaciones desde la red fija de dicha compañía con terminales conectados al sistema «Iridium».

(BOE núm. 45, de 22 de febrero 99)

- **ORDEN de 9 de marzo de 1999** por la que hacen públicas las modificaciones de determinadas condiciones de los programas de descuentos del servicio telefónico fijo disponible al público, provincial e interprovincial, que presta «TELEFÓNICA, S.A.».

(BOE núm. 65, de 17 de marzo 99)

- **ORDEN de 26 de marzo de 1999** por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 25 de marzo de 1999, por el que se determinan los precios que los operadores autorizados deberán abonar a «TELEFÓNICA, S.A.», por la provisión del acceso indirecto al bucle de abonado de la red pública telefónica fija, hasta el 31 de diciembre del año 2000.

(BOE núm. 86, de 10 abril 99)

- **ORDEN de 19 de abril de 1999** sobre determinados programas de descuentos del servicio telefónico provincial e interprovincial que presta «TELEFÓNICA, S.A.».

(BOE núm. 101, de 28 abril 99)

- **ORDEN de 13 de mayo de 1999** por la que se determinan y publican las cuotas mensuales de abono que deberá aplicar «TELEFÓNICA SOCIEDAD OPERADORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA, S.A.U.» a las líneas susceptibles de arrendamiento, analógicas de banda vocal de calidad ordinaria a 2 hilos (UIT-M 1040) y digitales a 2048 kbits/segundo, sin estructurar, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.

(BOE núm. 116, de 15 de mayo 99)

- **ORDEN de 15 de junio de 1999** por la que se determinan y publican las tarifas de servicio de telefonía móvil automática analógica que presta «Telefónica SERVICIOS MÓVILES, S.A.», como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.

(BOE núm. 152, 26 de junio 99)

- **ORDEN de 23 junio de 1999** por la que se determinan y publican los precios del servicio telefónico fijo disponible al público en sus ámbitos provincial, interprovincial e internacional, que presta «TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.», así como de las llamadas de los abonados de su red fija efectúen a abonados de las redes de telefonía móvil automática, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e incremento de la Competencia.

(BOE núm. 155, de 30 junio 99. Corrección de errores y erratas, BOE núm. 172, de 20 julio 99).

- **ORDEN de 19 de julio de 1999** por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de junio de 1999 por el que se aprueba la inclusión de una nueva tarifa por prestación del servicio de distribución de ámbito nacional de señales de televisión con utilización de tecnología digital de compresión de señal de vídeo, entre las autorizadas al Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISIÓN).

(BOE núm. 179, de 28 julio 99)

- **ORDEN de 27 de julio de 1999** sobre determinados programas de descuentos del servicio telefónico provincial e interprovincial que presta «TELEFÓNICA, S.A.».

(BOE núm. 187, de 6 agosto 99)

- **ORDEN de 27 de julio de 1999** por la que se aprueban modificaciones de tarifas del servicio de alquiler de circuitos radiofónicos que presta «TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.».

(BOE núm. 187, de 6 agosto 99)

- **Orden de 26 de octubre de 1999**, por la que, en aplicación del Real Decreto-Ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, se determinan y publican los precios del servicio telefónico fijo disponible al público en sus ámbitos metropolitano, provincial, interprovincial e internacional, y se adaptan a dichos precios los correspondientes a los servicios de inteligencia de red y los del servicio telefónico cursado desde teléfonos de uso público, situados en el dominio público de uso común, prestados por «TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.».

(BOE núm. 260, de 30 octubre 99. Corrección de errores y erratas, BOE núm. 277, de 19 noviembre 99)

- **ORDEN de 26 de octubre de 1999** por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de octubre de 1999 por la que se aprueban tarifas del servicio portador soporte del servicio de televisión digital terrenal.

(BOE núm. 265, de 5 noviembre 99)

- **ORDEN de 1 de diciembre de 1999** por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 11 de noviembre de 1999, por el que se aprueba el programa de descuentos «Plan Europa 15» para el servicio telefónico de ámbito internacional, cursado a través de líneas individuales y accesos básicos de la Red Digital de Servicios Integrados de «TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.».

(BOE núm. 293, de 8 diciembre 99)

- **ORDEN de 9 diciembre de 1999** por la que, en aplicación del Real Decreto-Ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, se determinan y publican los precios del servicio de líneas susceptibles de arrendamiento prestado por «TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.».

(BOE núm. 298, de 14 diciembre 99)

- **ORDEN de 20 diciembre de 1999** por la que, en aplicación del Real Decreto-Ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, se determinan y publican los precios de las llamadas que los abonados de la red pública telefónica fija realizan a los abonados de las redes de telefonía móvil automática, incluidas las de comunicaciones móviles personales, y se adaptan a dichos precios los correspondientes al servicio cursado desde teléfonos de uso público, situados en el dominio público de uso común, prestados por «TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.».

(BOE núm. 310, de 28 diciembre 99)

## e) Servicio de televisión digital terrenal

- **RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de enero de 1999, por el que se aprueba el pliego de bases y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el concurso público para la adjudicación de una concesión para la explotación del servicio público de la televisión digital terrenal y por el que se convoca el correspondiente concurso.

(BOE núm. 11, de 13 enero 99)

- **RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 1999 por el que se amplían los plazos establecidos en el calendario del pliego de bases y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el concurso público para la adjudicación de una concesión para la explotación del servicio público de la televisión digital terrenal aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de enero de 1999, y se establece el régimen económico en que el ente público de la Red Técnica Española de Televisión prestará el servicio de portador soporte del servicio de televisión digital terrenal.

(BOE núm. 72, de 25 marzo 99)

- **RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de junio de 1999, por el que se habilita a las entidades gestoras del servicio público esencial de televisión para que presten el servicio de televisión digital terrenal en los términos establecidos en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal.

(BOE núm. 173, de 21 julio 99)

- **RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la



que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 1999 por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación por concurso público, mediante procedimiento abierto, de 10 concesiones para la explotación del servicio público, en gestión indirecta, de radiodifusión sonora digital terrenal.

(BOE núm. 184, de 3 agosto 99)

- **RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999**, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de junio de 1999 por el que se resuelve el concurso público convocado para la adjudicación de una concesión habilitante para la explotación del servicio de televisión digital terrenal.

(BOE núm. 232, de 28 septiembre 99)

- **RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999**, de la Secretaría General de Telecomunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de noviembre de 1999, por el que se modifica la cláusula 12 del anexo I del Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 1999 por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación, por concurso público, mediante procedimiento abierto, de 10 concesiones para la explotación del servicio público, en gestión indirecta de radiodifusión sonora digital terrenal.

(BOE núm. 290, de 4 diciembre 99)

## 2. PUBLICACIONES DE 1999 EN DOCE

### 2.1. Legislación comunitaria

#### A) Normativa relativa a telecomunicaciones

- **DIRECTIVA 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999** sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

(DOCE L91/10, de 7 abril 99)

Como consecuencia de las nuevas tecnologías, la evolución del mercado y la legislación en materia de redes, las actuales Directivas aplicables al sector de los equipos terminales de telecomunicación ya no son aptas para regular los cambios previsibles en el sector. En concreto, aun cuando la Directiva 98/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo consolidó las disposiciones relativas a los equipos terminales de telecomunicación y a los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad, no se abarcó una parte importante del mercado de los equipos radioeléctricos.

En este sentido, la Directiva comentada entiende que cualquier regulación relativa a la fabricación, la comercialización y el uso de equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación debería abarcar los dos tipos de equipos.

Por su parte, en cuanto a los requisitos necesarios aplicables a los equipos radioeléctricos y de equipos terminales de telecomunicación cabe significar que, será necesaria la armonización de las legislaciones para prever posibles obstáculos a la libre circulación de mercancías en la Comunidad, así como que no supondrá impedimento a la innovación tecnológica y habrá que tenerse en cuenta los requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética.



Por lo que respecta a los potenciales usuarios de los mismos, cabe señalar que, entre otros objetivos, se deberá velar por la salud de las personas, así como tener en cuenta en el diseño de los equipos su adaptación a personas discapacitadas. Además, se deben introducir características técnicas que impidan la violación de los datos personales y de la intimidad de los usuarios y de los abonados, así como el fraude.

Asimismo, y sin perjuicio de que se debe garantizar el uso eficaz del espectro de radiofrecuencias a fin de evitar interferencias perjudiciales, también se establece como necesaria la protección a las redes públicas de los daños que pudieran causar la utilización de estos equipos de radio y de terminales de telecomunicación.

Por otro lado, las interfaces armonizadas entre equipos terminales y redes de telecomunicación contribuyen a fomentar los mercados competitivos de equipos terminales y servicios de red. De esta manera, los operadores de los servicios públicos de redes de telecomunicaciones deberán publicar unas especificaciones técnicas precisas y adecuadas relativas a dichas interfaces a fin de hacer posible que los fabricantes diseñen equipos terminales de telecomunicación que cumplan los requisitos de la presente Directiva.

Resulta también conveniente la disposición de normas armonizadas en el ámbito europeo en lo que respecta al diseño y la fabricación de equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, que proporcionan, en beneficio del interés público, una presunción de conformidad con los requisitos esenciales.

Para que la Comisión pueda llevar a cabo una vigilancia eficaz del mercado, es preciso que los estados miembros faciliten las informaciones pertinentes relativas a tipos de interfaces, aplicación de las normas armonizadas, organismos notificados y autoridades de vigilancia. Por su parte, los organismos notificados y las autoridades de vigilancia deberán intercambiar información sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación para permitir dicha vigilancia eficaz del mercado.

Por lo que respecta a los equipos radioeléctricos, los fabricantes deberán notificar a los Estados miembros su intención de ponerlos en el mercado cuando utilicen bandas de frecuencia cuyo uso no esté armonizado en toda la Comunidad. En cuanto a los equipos que cumplan los requisitos esenciales aplicables a los mismos, podrán circular libremente y serán puestos en servicio, pudiendo estar supeditados a autorizaciones en relación con el uso del espectro de radiofrecuencias y la prestación del servicio de que se trate. En este sentido, y considerando que las frecuencias de radio se atribuyen a nivel nacional, es necesario disponer de la correspondiente disposición de salvaguardia que permita a los Estados miembros prohibir, limitar o exigir la retirada de su mercado del equipo radioeléctrico que haya causado interferencias perjudiciales.

En materia de responsabilidad, junto a la general sobre daños causados por productos defectuosos (Directiva 85/374/CE, del Consejo), se incluyen medidas aplicables a los responsables de la introducción en el mercado europeo de aparatos para su venta, cuando causen daños graves a una red o provoquen interferencias perjudiciales.

En la presente Directiva se prevé la creación de un Comité que reúna a las partes directamente implicadas en la aplicación de la regulación de los equipos de radio y de telecomunicación y, en particular, a los organismos nacionales de evaluación de la conformidad y los organismos nacionales responsables de la vigilancia del mercado, a fin de ayudar a la Comisión a conseguir una aplicación armonizada y proporcionada de la reglamentación que responda a las necesidades del mercado y del público en general.

La presente Disposición sustituye a la citada Directiva 98/13/CE y, en consecuencia, queda derogada. Asimismo, las Directivas 73/23/CEE y 89/336/CEE dejarán de ser aplicables a los aparatos cubiertos por la presente norma, excepto de los requisitos de protección y seguridad y de determinados procedimientos de evaluación de la conformidad.

Por último, la presente Directiva no se aplicará a los equipos utilizados exclusivamente para actividades relacionadas con la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado en el ámbito del Derecho penal.

• **DIRECTIVA 1999/59/CE del Consejo de 17 de junio de 1999** por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de telecomunicaciones.

(DOCE L162/63, de 26 junio 99)

Las normas en materia del Impuesto de Valor Añadido aplicables a los servicios de telecomunicaciones (Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocio) no son adecuadas ni para gravar la totalidad de dichos servicios, cuyo consumo se realiza en el interior de la Comunidad, ni para prevenir un falseamiento de la competencia en este ámbito.

Por esta razón, para el correcto funcionamiento del mercado interior se hace conveniente la eliminación de tal falseamiento y, por consiguiente, la introducción de nuevas normas armonizadas para esta categoría de actividades. Cabe destacar que, respecto a los servicios de telecomunicaciones, es conveniente garantizar sobre todo la imposición de estos servicios en la Comunidad, consumidos por clientes establecidos en la misma.

Para alcanzar este objetivo, la presente Directiva establece que los servicios de telecomunicaciones prestados a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad o a beneficiarios establecidos en un país tercero se gravarán principalmente en el lugar del beneficiario de estos servicios.

Asimismo, para gravar una única vez los servicios de telecomunicaciones prestados por sujetos pasivos establecidos en un tercer país a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad, que ade-

más sean servicios aprovechados o explotados en la misma, los Estados miembros deberían hacer uso de la posibilidad de cambiar el lugar considerado de la prestación.

Por todo ello, por medio de la presente Disposición se modifica, en el sentido mencionado anteriormente, la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de telecomunicaciones.

• **DIRECTIVA 1999/64/CE de la Comisión de 23 de junio de 1999** por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones y de televisión por cable propiedad de un único operador sean entidades jurídicas independientes.

(DOCE L175/39, de 10 julio 99)

El artículo 2 de la Directiva 95/51/CE, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, exigía a los Estados miembros que garantizaran que los operadores de telecomunicaciones que suministrasen infraestructuras de red de televisión por cable llevasen una contabilidad separada por lo que respecta al suministro de cada una de las redes y a sus actividades en calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones.

La presente Directiva se basa en la evaluación efectuada por la Comisión con arreglo al artículo 2 de la Directiva 95/51/CE.

Como preparación de esta evaluación, se encargaron varios estudios, en virtud de los cuales se llegó a la conclusión de que, cuando existe un alto grado de competencia en los mercados de acceso local, la propiedad conjunta de redes de telecomunicaciones y de redes de televisión por cable por parte de una única empresa frena el desarrollo hacia una infraestructura multimedia

total en perjuicio de los consumidores, de los prestadores de servicios y del conjunto de la economía europea.

Asimismo, la Comisión comprobó que la prestación conjunta en la Comunidad de servicios de telecomunicaciones y de televisión por cable por parte de un único operador crea una posición de partida asimétrica, favorable a los operadores dominantes de telecomunicaciones en comparación con los nuevos. Esta situación supone una importante limitación para el desarrollo óptimo de los mercados de telecomunicaciones.

Además, en los casos en que los Estados miembros han concedido a un organismo de telecomunicaciones un derecho especial o exclusivo para construir y explotar redes de televisión por cable en la misma zona geográfica en la que ocupa una posición de dominio en el mercado de servicios que utilizan infraestructuras de telecomunicaciones, dicho organismo no tiene aliciente alguno que le impulse a mejorar su red pública de banda estrecha de telecomunicaciones ni su red de banda ancha de televisión por cable para conseguir una red integrada de comunicaciones de banda ancha.

Conforme a estas circunstancias, la Comisión considera necesario separar la propiedad de ambas redes en dos empresas diferentes ya que su propiedad conjunta hace que estos organismos retrasen la aparición de nuevos servicios avanzados de comunicación y limita, por ende, el desarrollo técnico en perjuicio de los usuarios. Por lo tanto, se pretende que todos los Estados miembros deban velar por que los organismos de telecomunicaciones que ocupan una posición dominante en el suministro de redes públicas de telecomunicaciones y servicios públicos de telefonía vocal y que hayan creado su red de televisión por cable con arreglo a derechos especiales o exclusivos exploten dicha red por medio de una entidad jurídica independiente.

Dado que la situación del mercado es diferente en cada Estado miembro y es probable que se desarrolle de forma diversa, el proceso de revisión que recoge esta Directiva debería lle-

varse a cabo con la necesaria flexibilidad para tener en cuenta la situación en cada mercado nacional.

Finalmente, cabe señalar que la distribución de programas audiovisuales destinados al público en general a través de redes de telecomunicaciones, así como el contenido de dichos programas, no estarán sujetos a lo dispuesto en la presente Directiva.

• **DECISIÓN n.º 128/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 1998** relativa a la introducción coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad.

(DOCE L017/10, de 22 enero 99)

A los efectos de esta Decisión, con la expresión UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) se designa el sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación con capacidad para servir de soporte a servicios multimedia de nuevo tipo que superen las posibilidades de los sistemas actuales de segunda generación, como el GSM, y con capacidad para un uso combinado de componentes terrestres y de satélites.

Con carácter general, para la prestación de servicios multimedia inalámbricos de banda ancha, incluidos los servicios a través de Internet y otros basados en el protocolo Internet (IP), se hace necesario desarrollar una nueva generación de sistemas innovadores que sean capaces de transportar con rapidez un volumen importante de datos mediante el uso combinado de componentes terrestres fijos y móviles, junto con enlaces por satélite.

Las comunicaciones móviles e inalámbricas tienen una importancia estratégica no sólo para el desarrollo del sector comunitario de las telecomunicaciones y para la sociedad de la información, sino también para la economía y el empleo en la Comunidad en general.

Tal y como se expresa en la propia Decisión, para crear un clima favorable a la inversión y al despliegue del UMTS y permitir el desarrollo de servicios comunitarios, paneuropeos y mundiales que cubran un territorio lo más extenso posible, los Estados miembros deben permitir la introducción rápida y coordinada de redes y servicios UMTS compatibles en la Comunidad.

Por otro lado, se señala la importancia que tiene en esta materia la amplitud del espectro disponible para la intensidad de la competencia en los mercados, por lo que se deberá tener en cuenta la demanda estimada cuando haya que determinar el espectro que debe asignarse. No obstante, se deberá atribuir un espectro suficiente, a fin de proporcionar una oferta amplia y competitiva de servicios multimedia móviles.

Por último, la Comunidad ha tomado como base el éxito obtenido por la generación actual de productos de tecnología móvil digital, como es el sistema GSM, tanto en Europa como en el resto del mundo. A su vez, y de conformidad con la legislación comunitaria, no debe producirse discriminación entre los operadores de redes GSM y las nuevas empresas que participen en los mercados de UMTS. Por esta razón, los UMTS deben desarrollarse en un entorno integral sin solución de continuidad que permita la itinerancia total con las redes de GSM y entre los componentes terrestres de satélites de las redes UMTS, lo que significa que posiblemente se precisen terminales híbridos como los terminales modo/banda dual GSM/UMTS y terminales terrestres de satélite.

Por consiguiente, la presente Decisión tiene por objeto facilitar la introducción rápida y coordinada en la Comunidad de redes y servicios UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) compatibles, sobre la base de los principios del mercado interior y conforme a la demanda del mercado.

• **DECISIÓN n.º 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de enero de 1999** por la que se aprueba un plan plurianual de

acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales.

(DOCE L033/10, de 6 febrero 99)

En la presente Decisión, se parte de la premisa de que Internet ofrece claras ventajas. Sin embargo, se tiene en cuenta que, para que el consumidor aproveche plenamente el potencial de Internet, es esencial crear un entorno de utilización más seguro, luchando contra la utilización ilícita de las posibilidades técnicas de Internet, especialmente en el caso de los delitos contra los menores, del tráfico de seres humanos o de la difusión de ideas racistas o xenófobas.

Asimismo, se considera imprescindible la coordinación a escala europea de organismos de autorregulación, debiéndose fomentar los mecanismos de autorregulación del sector, así como el establecimiento de códigos de conducta eficaces dentro del marco regulador vigente.

De esta manera, resulta conveniente fomentar las actividades de sensibilización que se están llevando a cabo en los Estados miembros, con el objetivo de que los usuarios comprendan tanto las ventajas como los inconvenientes de Internet con el fin de aumentar la utilización de los servicios ofrecidos por este sector. En particular, los consumidores deben contar con una información suficiente para poder aprovechar plenamente las ventajas ofrecidas en este campo. Por todo ello, se estima conveniente establecer un plan de acción plurianual para propiciar un uso más seguro de Internet, que se denomina «plan de acción», el cual ha sido aprobado en virtud en la presente Decisión.

Finalmente, se destaca que este plan de acción debe supervisarse de manera continuada y sistemática para adaptarlo, cuando sea necesario, a la evolución del mercado de los contenidos multimedia y audiovisuales, así como para efectuar una evaluación independiente de dichos avances a fin de obtener la información de conjunto necesaria para determinar los objetivos poste-



riores medidos en materia de contenidos. Asimismo, también cabe significar que, al concluir el presente plan de acción, deberá realizarse una evaluación final de los resultados obtenidos en relación con los objetivos que se establecen en la presente Decisión.

- **COMUNICACIÓN con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n.º 17 del Consejo** en relación con una solicitud de prórroga de la Decisión 89/467/CEE de la Comisión por la que se concedía una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE (Asunto IV/C.2/30.566- UIP Cinema).

(DOCE C205/6, de 20 julio 99)

La presente Comunicación tiene por objeto el análisis por parte de la Comisión de la nueva solicitud de prórroga de la exención concedida a los acuerdos constitutivos de United International Pictures BV (UIP).

La UIP es una empresa de distribución cinematográfica creada por Paramount Picture Corporation, Universal Studios Inc. y Metro-Goldwyn-Mayer Inc., que se dedican a la financiación, producción y distribución de largometrajes y productos afines para su exhibición en salas de cine, en televisión y en otros medios. Por su parte, los acuerdos UIP tienen lugar en el mercado de la distribución de largometrajes, cortometrajes y avances para su exhibición en salas de cine.

Dentro de este ámbito, se señala que la cuota media de UIP en la Comunidad fluctuó en torno a un 20% desde la exención de 1989, mientras que en el año 1997 la cuota fue tan sólo del 13%.

De acuerdo con esta comunicación, la Comisión tiene de nuevo la intención de adoptar una actitud favorable a estos acuerdos UIP, siempre que las partes los modifiquen y los lleven a la práctica.

## B) Otras disposiciones de interés

### a) De carácter general

- **REGLAMENTO (CE) n.º 1216/1999 del Consejo de 10 de junio de 1999**, por el que se modifica el Reglamento n.º 17, primer Reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado.

(DOCE L148/5, de 15 junio 99)

- **REGLAMENTO (CE) n.º 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999** relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

(DOCE L336/21, de 29 diciembre 99)

- **DIRECTIVA 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999** sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

(DOCE L171/12, de 7 julio 99)

### b) Decisiones

- **DECISIÓN del Consejo de 26 de abril de 1999** relativa a la creación de una infraestructura de información estadística comunitaria sobre la industria y los mercados de los sectores audiovisuales y afines.

(DOCE L117/39, de 5 mayo 99)

- **DECISIÓN n.º 1719/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999** sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre Administraciones (IDA)

(DOCE L203/1, de 3 agosto 99)

- **DECISIÓN n.º 1720/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio**



de 1999 por la que se aprueba un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA), así como el acceso a las mismas.

(DOCE L203/9, de 3 agosto 99)

### c) Resoluciones

- **RESOLUCIÓN del Consejo de 19 de enero de 1999** sobre la dimensión relativa a los consumidores en la sociedad de la información.

(DOCE C023, de 28 enero 99)

- **RESOLUCIÓN del Consejo de 28 de junio de 1999** sobre medidas para hacer frente al problema informático del año 2000.

(DOCE C200/2, de 15 julio 99)

- **RESOLUCIÓN del Consejo de 19 de julio de 1999** relativa a la participación de Europa en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (Galileo): Fase de definición.

(DOCE C221/1, de 3 agosto 99)

### d) Comunicaciones

- **COMUNICACIÓN de la Comisión** en virtud del artículo 8 de la Directiva 93/38/CEE (1999/C 129/05). Lista de los servicios que se consideran excluidos, en virtud de su artículo 8, del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones.

(DOCE C129/11, de 8 mayo 99)

- **COMUNICACIÓN de la Comisión** en virtud del artículo 8 de la Directiva 93/38/CEE (1999/C 156/03). Lista de los servicios que se consideran excluidos, en virtud de su artículo 8, del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

(DOCE C156/3, de 3 junio 99)

- **COMUNICACIÓN** con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n.º 17 del Consejo en relación con una solicitud de declaración negativa o exención de conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE (Asunto IV/32.150- Eurovisión).

(DOCE C248/4, de 1 septiembre 99)

